



Programa Valencià de Protecció Integral i Acogida
de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de València

PAZ PARA COLOMBIA

Imagen: Cali, capital de la resistencia. Aníbal Ramírez - Semanario Voz.
La Loma de la Dignidad, Páramo Nacional, Cali, 2021.



La presente publicación se hace en el marco del Programa Valenciano de Protección Integral y Acogida de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos (<https://valenciadefensa.org/es/>).

El programa **València Defensa** consiste en la reubicación y protección temporal de defensoras y defensores de derechos humanos pertenecientes a comunidades, organizaciones y movimientos sociales que han sufrido amenazas contra su vida o integridad física y psicológica con motivo de la labor que realizan en sus respectivos países.

Durante ese periodo, además del trabajo individualizado con cada defensora y defensor (en diferentes áreas: psicosocial, formativa, etc.) junto con sus organizaciones, se realiza un trabajo de incidencia, creación y fortalecimiento de redes de solidaridad y apoyo con la intención de visibilizar el trabajo de defensa de los derechos humanos y, a su vez, generar redes de protección de los mismos.

El programa está conformado por diez organizaciones valencianas: Atelier, CEAR PV, CEDSALA, La Colectiva Mujeres Refugiadas, Exiliadas y Migradas, Asociación Entreiguales, Intersindical Valenciana, Mundubat, Periferias del Món, Plataforma de Solidaridad con el Pueblo Saharaui y Sodepau.

Está financiado por la Concejalía de Cooperación al Desarrollo y Migración del Ayuntamiento de Valencia; por el Institut Valencià de la Joventut (IVAJ), de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, y por ProtectDefenders.eu.



Presentación pública de las defensoras 2022 del Programa Valenciano de Protección Integral y Acogida de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos. Ayuntamiento de Valencia y Generalitat, 23 de septiembre de 2022. @VDefensa

Cuando pensamos en Colombia, imaginamos muchas cosas: playas, música, alegría, sol, agua, verde... Nos trasladamos a ese hermoso contraste entre mares, sabanas y sierra que componen nuestra geografía y visualizamos esa increíble diversidad humana que se expresa en nuestra cultura popular, música, bailes, fiestas, literatura, etc., una idiosincrasia que es expresión del mestizaje indígena, africano y español que conforma nuestra nación, particularidad expuesta de una forma tan especial en la literatura de autores como Gabriel García Márquez.

Aún estamos lejos, aunque en camino, de comprender nuestra diversidad y de darnos un modelo de sociedad y una institucionalidad acordes con ella, pero también y muy especialmente que acaben con la incruenta desigualdad social, despojo y pobreza a la que grandes sectores de la población, tanto rural como urbana, se ven abocados, origen y causa de las terribles violaciones de derechos humanos y de los procesos de exclusión social, cultural y territorial por los que regularmente encabezamos las estadísticas.

Los terribles indicadores de violaciones de derechos humanos están asociados a un proceso cíclico de despojo y pauperización de la vida para grandes sectores de la sociedad, a un miedo casi endémico de las élites económicas y políticas a que las capacidades sociales y comunitarias se desarrollen para alcanzar estándares de vida digna, porque, después de todo, la acción colectiva de la población y sus liderazgos son vistos con sospecha y considerados como un riesgo para sus privilegios. Así, tanto el Estado como las instituciones que deben garantizar la paz y el bienestar general son en realidad un aparato que desde siempre ha actuado como instrumento mediante el cual las élites mantienen su poder y control.

Las conocidas revoluciones liberales propias de los procesos de industrialización o que, como en el caso de Latinoamérica, se dieron a principios del siglo XX, lideradas por vanguardias intelectuales y políticas, modernizantes y progresistas, y no en pocos casos por verdaderas revueltas populares como la Revolución mexicana, permitieron la implementación de reformas agrarias, reformas universitarias, legislaciones laborales, el derecho al voto de las mujeres, políticas de fomento económico, planificación urbana, etc. Reformas necesarias para la democratización de la tierra, la economía y el saber NO se dieron en Colombia, pues la hegemonía de las élites imperó a pesar de los constantes esfuerzos por parte del movimiento social por conquistar un gran número de reivindicaciones.

A esta tensión social permanente se ha respondido de la forma más violenta, y se han producido distintos ciclos de violencia. Muchos estudiosos consideran que aún nos encontramos en un ciclo de larga duración que tiene como hito histórico el 9 de abril de 1948, con el magnicidio del candidato presidencial Jorge Eliecer Gaitán. La élite se cerró al cambio. De eso dan cuenta, al menos, dos famosos acuerdos.

El primero, con el objetivo de asegurar el control político de las élites, fue el fa-



moso Pacto de Benidorm (1956), mediante el cual se aseguró la alternancia en el poder de las élites conservadoras y liberales, a costa del exterminio de la oposición, como demuestra la represión que sufrieron las distintas alternativas políticas, como la Unión Nacional de Oposición en los setenta, la Unión Patriótica en los ochenta y noventa, la Alianza Democrática M-19, A Luchar, etc. Los procesos de paz en los noventa, con las distintas insurgencias que aparecieron en medio de este ambiente de exclusión política y económica, junto a la nueva Constitución, abrieron una ventana democrática

—
LAS DEUDAS SOCIALES SON MUCHAS, AL IGUAL QUE LOS ACTORES Y CAUSAS DEL CONFLICTO, PERO EL ACUERDO DE PAZ CON LAS FUERZAS ARMADAS REVOLUCIONARIAS DE COLOMBIA (FARC) EN 2016 Y EL ASCENSO DE UN GOBIERNO PROGRESISTA ABREN UNA OPORTUNIDAD HISTÓRICA PARA CERRAR EN PARTE EL CICLO DE VIOLENCIA.

de esperanza, que se vio frustrada por el despliegue de reformas de corte neoliberal que restringieron derechos y que terminaron de empobrecer a importantes capas de la población, en medio de una gran represión política.

Un segundo acuerdo que vale la pena mencionar es el Pacto de Chicoral (1972), firmado por el Gobierno de la época, congresistas y terratenientes, para frenar los intentos de reforma agraria promovida por un Gobierno anterior.

Pactos de este tipo, de carácter regional o sectorial, provocaron, además, la proliferación del paramilitarismo en el país, verdaderos ejércitos privados que, no en pocos casos coordinados o al menos tolerados por la fuerza pública, impidieron mediante los métodos más perversos cualquier intento de democratización política y social. Esta situación se vio agravada, además, por la preeminencia de las economías ilegales derivadas del narcotráfico y las distintas cadenas extractivistas.

Las deudas sociales son muchas, al igual que los actores y causas del conflicto, pero el acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 2016 y el ascenso de un Gobierno progresista abren una oportunidad histórica para cerrar en parte este ciclo en el marco de una política de diálogo social y reconciliación alrededor de la defensa del derecho a la paz y a la vida.

El primer paso para cambiar la realidad pasa por tener conciencia de ella, y Colombia se encuentra en ese camino. Los retos para el nuevo Gobierno y para el movimiento social en su conjunto se definen al menos en tres escenarios: la necesidad de conquistar la paz territorial bajo la consigna de una paz total, la necesidad de justicia social y la conciencia de una justicia climática. ●

Puerto Resistencia, Cali, 2021.
Imagen: Anllel Ramírez, fotoreportera del Semanario Voz.

Por Beatriz Hernández Semillas Verdes, proceso de ASONAM-C, filial de la Federación Democrática Internacional de Mujeres (FDIM) Colombia, octubre de 2022



Plataforma de Mujeres por la Paz, 2021. Asociación Nacional de Mujeres Colombianas. @Asonam de València

Tenemos una herencia de más de doscientos años de violencia sistémica, estatal y organizativa sustentada por Gobiernos que mantuvieron su poder sobre la base de la acumulación, el despojo, el extractivismo, la depredación y la depreciación de la vida misma y, por tanto, de los derechos de las comunidades, los territorios y las personas.

En ese panorama general es en el que persiste la defensa de los derechos humanos en Colombia, donde los y las defensoras sociales hemos venido sorteando el juego de la muerte como la rifa de un número que ningún líder compró, pero que un día nos terminamos ganado uno a uno, para no volver a vivir, a caminar, a circular por nuestras tierras. Algunos sobreviven gracias al exilio, al

que acuden para salvar la vida, una ruta que aún demanda de los pueblos mucha solidaridad, pero que no siempre tiene respuestas, a pesar del Gobierno del cambio. Ahora podemos pensar que pasamos de la doctrina de la seguridad democrática, de la política de seguridad material, a la política de la seguridad de la vida, a la política de la seguridad humana; así lo llama el nuevo Gobierno, y para los y las defensoras ese anuncio es la apertura a construir rutas y estrategias, que no solo sean para huir de la muerte, sino para prevenirla, para dotar de herramientas a los organismos, para acompañar de forma idónea a quienes lamentablemente aún hoy son víctimas de las secuelas de esas viejas prácticas de la violencia en Colombia, de esas prácticas que llevan a que los divergentes frente a

esa cultura tradicional del poder, los alternativos, los militantes de las fuerzas de izquierda, los y las diferentes aún hoy sean perseguidos, amenazados, extintos, asesinados, desplazados, exiliados. Pues pervive la fuerza cultural de la violencia y de una derecha con vestigios colonizadores, fascistas y racistas.

Superar los trastornos de la violencia implica varios retos: creemos que desde los pueblos hermanos será vital toda acción, pues a pesar de que en Colombia se eligió un nuevo Gobierno el 7 de agosto de 2022, eso no se traduce en que inmediatamente cambian las acciones de control territorial; por el contrario, a pesar de que el Gobierno ha llamado a una paz total, a un diálogo con todo y con todas, y a que cese toda forma de violencia, estas persisten en la vida de las veredas, de los barrios, de los caminos; la muerte acecha sola y en manada, nos masacran, nos señalan, nos hacen correr, dejarlo todo, se recrudece la guerra por el control del territorio, y en medio, la gente, las etnias, el campesinado, las mujeres, la juventud, las y los líderes.

Por eso las acciones que recomendamos a nuestros pueblos hermanos y aliados son programas de apoyo para poder acompañar no solo al líder desplazado, sino a su familia, a la organización, a través de diferentes estrategias que incluyan capacitación, creación de lugares de acogida con niveles de compartimentación, que puedan recibir a las familias, a medios de comunicación alternativos, para mantener el proceso organizativo que se busca romper dañando o afectando a las voces de los y las defensoras de las comunidades; fortalecer estrategias comunicativas de las organizaciones, rutas de seguridad para evidenciar posibles amenazas, programas que puedan recibir a los y las defensoras y sus familias en otros territorios, con medios que permitan la flexibilización de los procesos de exilio. Estas puedes ser algunas de las acciones.

En el momento actual de Colombia, las organizaciones tenemos un papel importante: organizaciones populares, sociales, ambientales, étnicas, de comunidades diversas, de jóvenes, sindicales, campesinas y de mujeres, en especial estas últimas, pues las mujeres son la mitad de la población de Colombia, donde la paz es un sueño colectivo y no viene de un Gobierno, sino de la construcción colectiva desde los territorios, desde las comunidades, desde las organizaciones, y fortaleciendo la participación ciudadana, garantizando la plenitud de los derechos para las personas, las comunidades y el territorio mismo. Sin más miedos. Esa es la paz total.

Por esto, desde la Asociación Nacional de Mujeres Colombiana (ASONAM-C), trabajamos comprometidas, como una organización de mujeres afiliadas, las capaces de aportarle a las mujeres colombianas en la formación política, clasista, feminista, anticapitalista y antipatriarcal. Estamos fuertemente sensibilizadas en la necesidad de trabajar por la unidad del movimiento social y la defensa de los derechos de las mujeres, organizadas en proceso del trabajo nacional e internacional de mujeres, comprometidas con la defensa de la paz con justicia social, en igualdad y equidad, desde la resistencia, desde la persistencia, desde la incidencia. Estamos los de abajo, los nadie, construyendo diálogo territorial, reconociéndonos como diferentes, pero atravesados por realidades comunes. Las mujeres organizadas de ASONAM-C, desde el campo a la ciudad, desde la más joven hasta la más sabia de nuestras mayores, hemos entendido que no hay relevos intergeneracionales, que se trata de un construir y germinarnos de forma permanente con la ciencia del momento social, política de nuestra conciencia de clase como mujeres obreras. Como mujeres cuidadoras. Desde la gente se construyen acciones de paz, desde la gente se construyen los cambios, se construye el nuevo Gobierno. ●

Por Ángela Susana Castellanos M. Asociación Nacional de Mujeres Colombianas (ASONAM-C)



Catatumbo Paro Nacional 2021. @Cpdhd

La implementación del proyecto de la «paz total» en la región del Catatumbo es un reto de enorme complejidad en Colombia, debido a la particularidad de la zona en comparación con otras de alto nivel de conflicto armado: su estratégica ubicación fronteriza, a escasos kilómetros del lago Maracaibo y el mar Caribe; su riqueza en recursos minerales (carbón, petróleo, oro, arcillas), su abundante agua y suelos fértiles (entre los mejores de la región). Hablamos de un territorio con una extensión equivalente a la región de Cantabria (España). Estas características despertaron el interés de capitales foráneos que se lucran tanto en el marco de legalidad impuesta (compañías mineras internacionales) como en el margen de la ilegalidad (narcotráfico, trata, venta de armas, contrabando, cultivo de coca).

El abordaje de la situación en la región del Catatumbo implica, por lo tanto, la participación de actores externos a Colombia; en primer lugar, el vecino país de Venezuela, que comparte el territorio y sufre las mismas consecuencias socioe-

conómicas y políticas en el margen fronterizo de su territorio. Vemos con buenos ojos su incorporación plena como país garante en la mesa de diálogo con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), grupo armado mayoritario en la zona. Entre los demás actores internacionales podemos mencionar los cárteles mexicanos del Clan del Golfo, estructura que cooptó a otros actores armados y transformó la región en una de las principales productoras de pasta de coca. Y otro actor, sin duda, está representado por las mineras internacionales, que hacen vida en la zona desde hace décadas, explotando los recursos estratégicos de este importante territorio.

Sin duda se trata de una ecuación con un alto grado de complejidad, en la que el actual Gobierno del Pacto Histórico, liderado por Gustavo Petro, va a impulsar la paz, dándole carácter de proyecto de ley: la paz total será una política de Estado, las instituciones y las entidades del Gobierno trabajarán por su consecución, y se reabrirá la posibilidad de los diálogos de paz en el territorio nacional. ●

Por Martha Bolívar, abogada defensora de derechos humanos de CORPEIS

El movimiento de las y los trabajadores, el movimiento social y popular en general, sus formas de organización y sus redes, sus expresiones de solidaridad, su capacidad de acción son por excelencia el motor que mueve el mundo. Sin su existencia es imposible la vida en comunidad, y son la respuesta histórica para adquirir mejores condiciones materiales y emocionales de vida y buen vivir. La acción colectiva y la organización social y comunitaria son experiencias identitarias, de resistencia y de dignificación.

El líder o la lideresa social son aquellas personas que representan un grupo social y sus agendas reivindicativas o de resistencia, en defensa de los derechos humanos, los territorios, el medio ambiente, la educación, la justicia, las garantías laborales, la igualdad y diversidad de género o la cultura en las comunidades. Esta vocación representa un peligro en Colombia, catalogada como uno de los países más peligrosos para ejercer el liderazgo social y la defensa de los derechos humanos. El objetivo claramente es desarticular los procesos y tejidos sociales de los que somos parte; previo a los asesinatos, somos sujeto de estigmatización, amenazas, desplazamiento, agresiones sexuales y todo tipo de hostigamientos, como los seguimientos, allanamientos, robos a sedes, robo de información, perfilamiento, procesos de criminalización, etc.

Colombia es de lejos uno de los países más inequitativos de América, con una población de 51.609.474 personas, de las que 24 millones somos población económicamente activa, con un 58% de ellas en la informalidad, y 12 millones de personas dedicadas a actividades agrícolas, quienes padecen, al igual que las mujeres, de las peores condiciones laborales. En 2020, el nivel de pobreza extrema llegó al 15%, el nivel de pobreza general alcanzó entonces al 42% de la población, y todo ello en medio de una riqueza natural y de recursos. Los poderes de orden económico, tanto de economías lícitas como ilícitas, han sido incapaces de cerrar la brecha y, al contrario, son los determinadores de tales inequidades.

«Los asesinatos de líderes sociales son crímenes políticos», dijo el relator especial para los Derechos Humanos de la ONU, Michael Frost.

957 líderes sociales fueron asesinados entre el 7 de agosto de 2018 y el 1 de agosto de 2022, una clara muestra de que quienes exacerbaban la inequidad desarrollan las formas para impedir las transformaciones. De ahí la urgencia de la solidaridad y de dar visibilidad a este fenómeno, de modo que permita atender esta emergencia humanitaria. Entre 1973 y 2019, 3.300 sindicalistas fueron asesinados en el país, según la Escuela Nacional Sindical (ENS).

ACTIVISMO PARA LA VIDA, RAZONES PARA LA ESPERANZA

Como parte de mi organización, quiero agradecer la acogida y la solidaridad con Colombia de la Comunidad Valenciana, el Ayuntamiento de Valencia y su tejido social, en especial a la Colectiva de Mujeres Refugiadas, Exiliadas y Migradas y a la Intersindical Valenciana. Nuestro an-



Cortesía de la Corporación para la Educación y la Investigación Social (CORPEIS). @Corpeis @IntersindicalV

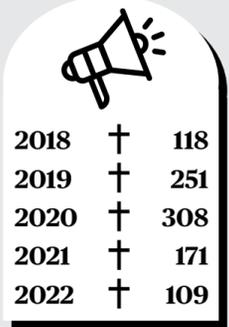
dar como Corporación para el Desarrollo de la Educación y la Investigación Social (Corpeis) se ve acompañado y respaldado. Somos una de las expresiones del movimiento social y del propósito colectivo de diversas organizaciones sociales, sindicales y populares que se juntaron para promover la formación y el liderazgo colectivo, el empoderamiento del movimiento social en su conjunto. Nuestro actuar se entrelaza en cuatro dimensiones: una central, que consiste en construir colectivamente y fortalecer los procesos educativos y de formación sindical, social y popular de las organizaciones; en nuestro andar nos encontramos con la necesidad de integrar otros elementos asociados al fortalecimiento y despliegue del movimiento social y sus organizaciones, de modo que hoy integramos la formación, la investigación, la comunicación alternativa y el activismo judicial.

Siempre desde ese enfoque crítico que requiere nuestro hacer, con el propósito de fortalecer los liderazgos sociales con la intención de afianzar identidades emancipatorias y las capacidades organizativas, que pasa por la experiencia del cambio epistemológico, es decir, por aprender del otro, pero también de nuestra historia de lucha, en construcción colaborativa del conocimiento, la ecología de saberes y la aprehensión de corrientes de pensamiento alternativo y decolonial que, en el caso latinoamericano, han florecido de manera especial en las últimas décadas. Gracias por acompañar el camino, que después de todo es el de vivir con dignidad, hasta que esta se haga costumbre. ●

Población latinoamericana en sindicatos		Porcentaje de Afiliación
País	Sindicalización	
Argentina	35 %	
Uruguay	25 %	
Brasil	18 %	
Venezuela	13 %	
México	12 %	
Chile	12 %	
Perú	5 %	
Colombia	4 %	

FUENTE: OIT.

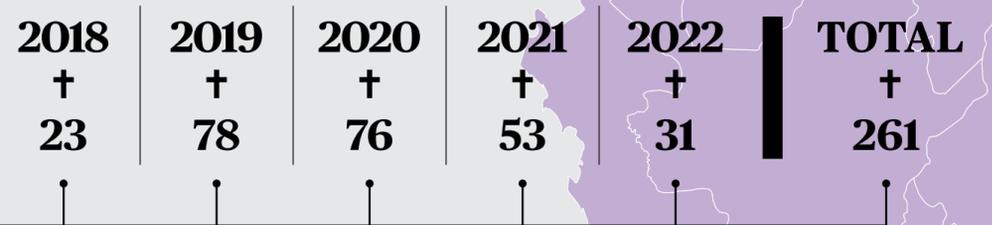
EL LÍDER O LA LIDERESA SOCIAL SON AQUELLAS PERSONAS QUE REPRESENTAN UN GRUPO SOCIAL Y SUS AGENDAS REIVINDICATIVAS O DE RESISTENCIA, EN DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS, LOS TERRITORIOS, DEL MEDIO AMBIENTE, LA EDUCACIÓN, LA JUSTICIA, LAS GARANTÍAS LABORALES, LA IGUALDAD Y DIVERSIDAD DE GÉNERO O LA CULTURA EN LAS COMUNIDADES.



Líderes sociales asesinados



Firmantes del acuerdo de paz asesinados



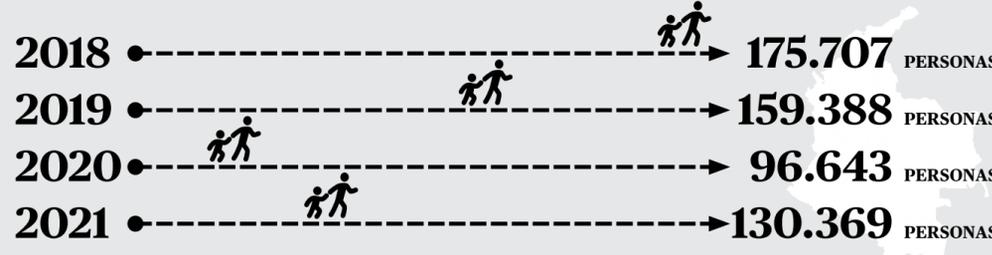
Cantidad de masacres cometidas y víctimas



Víctimas por minas antipersonales



Desplazamientos forzados internos

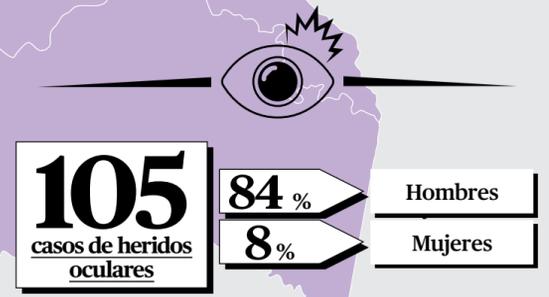
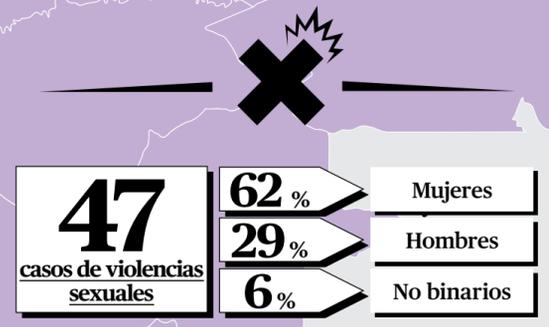
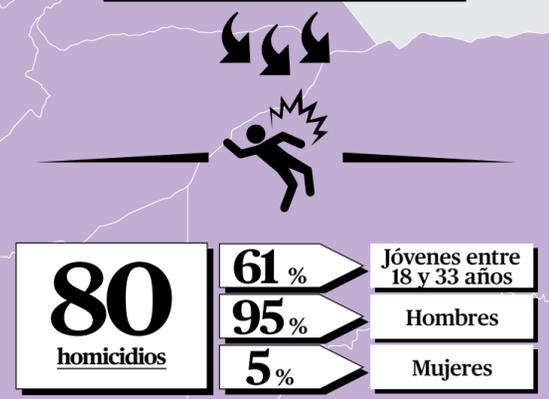


Principales datos de crímenes registrados durante el Paro Cívico Nacional

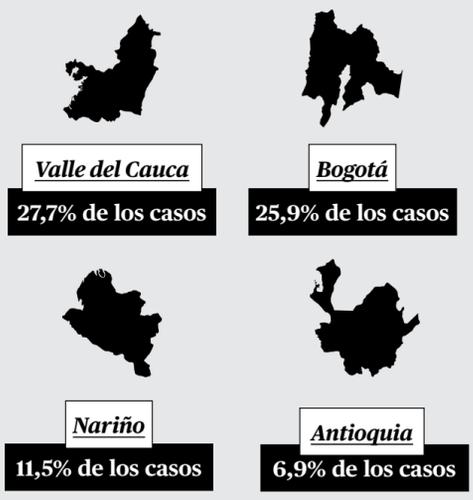


5.048

De los cuales se identifican:



Los departamentos que registraron mayores casos de violencia policial durante el Paro Nacional



Principales áreas de ocupación de las personas agredidas violentamente por acción policial:

Trabajadores de la prensa 176	Defensores de derechos humanos 120	Estudiantes 106	Brigadas médicas 50
Primer línea 46	Venta informal 21	Líderes sociales 18	Campeños 8
Recicladores 7	Habitantes de la calle 6	Excombatientes 1	Trabajadores sexuales 1



Colectiva de Mujeres Refugiadas, Exiliadas y Migradas, presentación de la obra teatral *MujerERES* el 24 de junio de 2022, en el marco de la presentación pública del informe de la Comisión de la Verdad. @ColectivaRefugi

Sin duda los derechos de las víctimas, que acaso son también derechos de todos los colombianos y de la humanidad misma, son uno de los grandes ejes y retos de la implementación del acuerdo de paz firmado entre el Gobierno colombiano y las FARC-EP en el año 2016. Pero también del mandato del nuevo Gobierno recién elegido —«Colombia, potencia mundial de la vida»—, puesto que la materialización de estos derechos es condición para la consolidación de una paz estable y duradera.

El reciente informe de la Comisión de la Verdad (24 de junio de 2022) es un paso en esa dirección. Construido con una metodología dialógica, pone en escena una disputa de sentido histórico que ha incomodado a las élites políticas enquistadas en el poder, cobijadas por toda una estrategia de impunidad durante décadas, quienes ven en el relato de las víctimas una amenaza.

La importancia de conocer la historia de la victimización, la guerra y sus contextos, desde los distintos puntos de vista, la determinación de los hechos, los actos de reconocimiento, los de perdón, fija un compromiso de todos los actores que decidieron participar con

un común objetivo, el de dar lugar al derecho a la verdad como escenario de justicia y como garantía de no repetición.

Cuando se reconstruye la memoria histórica, se visibiliza cómo el conflicto afectó y afecta de manera diferenciada, según los contextos, a pueblos originarios, al campesinado, a regiones estigmatizadas como zonas rojas, a los sectores populares, a las organizaciones sociales, a las personas LGTBTIQ, a las mujeres, y condiciona la participación política. El relato da cuenta del uso de la violencia como instrumento privilegiado de control social, político, territorial y de acumulación de capital.

Pero este esfuerzo queda a medias si no generamos un proceso masivo y consciente de divulgación, para la reflexión y para la transformación. De allí que una de sus primeras recomendaciones es que este relato llegue a las escuelas colombianas y su promoción en todos los mecanismos de apropiación cultural con los que cuenta una sociedad.

Invitamos a formar parte de este esfuerzo ingresando a la página web de la Comisión: <https://www.comisiondelaverdad.co/>

Capítulo de «Hallazgos y recomendaciones»: <https://www.comisiondelaverdad.co/hallazgos-y-recomendaciones-1>

HAY FUTURO SI HAY VERDAD

Recomendaciones del *Informe de la Comisión de la Verdad*:

- Avanzar en la construcción de la paz como un proyecto nacional
- Superar la impunidad de graves violaciones de los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario
- Garantizar la reparación integral, la construcción de memoria y el reconocimiento
- Una nueva visión de seguridad para la paz
- Consolidar una democracia incluyente, amplia y deliberativa
- Construir la paz territorial
- Enfrentar los impactos del narcotráfico y de la política de drogas
- Lograr una cultura de paz

La presente publicación se ha realizado con el apoyo financiero de l'Ajuntament de València. Las opiniones y contenidos de la misma no reflejan necesariamente la posición del Ajuntament de València.